

El instructor rebaja a «mera hipótesis» su sugerencia de que los escoltas podrían ayudarla a escapar, pero dice que no es arbitrario

El primer ministro del país transalpino se marchó a Túnez en los años 90 perseguido por las causas por corrupción

El juez introduce, por añadidura, un precedente internacional para reforzar su posición. Sin citar su nombre, alude al exprimer ministro italiano socialista Bettino Craxi, huido a Túnez en los años 90 tras verse envuelto en procedimientos por corrupción. «No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea, de un país mediterráneo (Italia), se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez), quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna», infiere.

Bajo la tormenta

El magistrado cierra su informe defendiendo que la medida cautelar «no deviene ilógica, irracional, arbitraria o desproporcionada» y que responde a los criterios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Begoña Gómez está enviada a juicio oral por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación en la causa sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el 'software' Transforma TSC, su sociedad privada y las gestiones realizadas desde Moncloa por Cristina Álvarez.

El informe del juez llega después de la tormenta provocada por las cautelares impuestas a Gómez el 20 de junio. Peinado le retiró el pasaporte, le prohibió salir de España y le impuso comparencias 'apud acta' dos veces al mes. La misma medida se acordó para Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que asistía a la esposa del presidente y que también fue enviada a juicio oral. Unas restricciones de derechos que levantaron una polvareda, que provocaron la airada queja de Interior y de las asociaciones policiales y que ha sido impugnada por la defensa a la espera de lo que resuelva la Audiencia de Madrid.

de los nuevos Presupuestos Generales del Estado en las Cortes, para lo que el Gobierno dio los primeros pasos este martes aprobando el techo de gasto, y elevándolo hasta la cifra récord de 226.032 millones de euros. «Somos un Gobierno de coalición y en minoría parlamentaria. Tenemos que acordar internamente que proyecto de presupuestos vamos a presentar a las Cortes Generales, y luego tendremos que ir y recabar esos apoyos parlamentarios con los distintos grupos que hay en la cámara, y lo haremos con humildad», zanjó el jefe del Ejecutivo.



La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ayer durante su comparecencia el Senado. EFE

Aagesen niega presiones de Moncloa o del PNV con Plus Ultra, Air Europa o Tubos

La vicepresidenta, que evaluó en parte estos rescates millonarios, dice frente a la UCO que no se opuso a salvar a la empresa vasca

M. SÁIZ-PARDO

«Nunca, nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto». Sara Aagesen negó ayer en el Senado cualquier irregularidad en los grandes rescates bajo sospecha de la SEPI (ya fuera de Moncloa o del PNV en el caso de Tubos Reunidos) y trató de poner distancia con las decisiones más polémicas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La vicepresidenta tercera compareció ante la comisión de investigación como antigua secretaria de Estado de Energía y miembro del Consejo Gestor del FASEE que examinó operaciones como Air Europa, Plus Ultra o Tubos Reunidos, las tres bajo investigación judicial en la actualidad en diferentes causas.

Aagesen también rechazó que su ascenso político fuera un premio por servicios prestados a Moncloa. «No me han dado galones», respondió al diputado del PP José Manuel Hernando, que la interrogó por su

paso por el órgano que avaló algunos de los desembolsos más discutidos de la pandemia. La hoy ministra para la Transición Ecológica insistió en que los rescates se analizaron con informes técnicos, unidades de la SEPI y asesores externos; y repitió varias fórmulas de distanciamiento: «No me consta»; «Desconozco el detalle»; «Ahora no recuerdo»; «No tengo conocimiento»; «No puedo responder».

El PP, por su parte, cargó contra el diseño y la gestión del fondo. Hernando sostuvo que la SEPI fue usada como «palanca de corrupción», sobre todo a través de las ayudas estratégicas, y denunció un «escandaloso secreto documental» en torno a algunos expedientes. También reprochó a Aagesen que formara parte del Consejo Gestor y le atribuyó una «responsabilidad política completa», sin perjuicio de lo que puedan decidir los tribunales.

El momento más delicado llegó con Tubos Reunidos. Anticorrupción y la UCO revelaron en el sumario del caso Hirurok que Miguel Ángel Figueroa, directivo de la SEPI, informó al expresidente de la sociedad pública Vicente Fernández de que Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, se había opuesto a aprobar la ayuda de 112,8 millones «aparentemente por razones de carácter ecológico». Esa su-

puesta resistencia inicial aparece en el relato fiscal como el punto que precedió a las gestiones de Fernández, Antxon Alonso y Leire Díez, incluida la vía PNV y la estrategia de «actuar vía Antxon y vía Santos». Es decir, Santos Cerdán, socio de Alonso en Servinabar.

Aagesen negó esa versión. «Le puedo asegurar que el 15 de junio no pude asistir», afirmó sobre la reunión del Consejo Gestor citada en el sumario. Añadió que aquella sesión fue «solo una reunión informativa» y que «no fue nadie del ministerio» en representación de Energía. La vicepresidenta explicó que la votación de Tubos Reunidos se produjo después, el 13 de julio de 2021, y que en esa sesión el voto fue delegado en el subsecretario. «Entiendo que fue una decisión con todos los criterios», dijo.

La ministra enmarcó el rescate de Tubos en el contexto de la pandemia y de la crisis energética. Habló de una situación «extraordina-

riamente compleja» que afectaba al tejido industrial, con incremento del gas y dificultades de compañías consideradas estratégicas. Dijo que el Consejo Gestor contaba con informes preliminares, análisis de las unidades de la SEPI y documentación técnica. «Los miembros del consejo nos lo tomábamos en serio», afirmó. Y apuntó que de 74 operaciones analizadas, 34 desistieron, diez recibieron informe desfavorable y 30 salieron adelante.

«Fraude corporativo»

En Air Europa, Aagesen negó contactos con Transportes o con Globalia. El PP le preguntó si el uso de Air Europa Holding había funcionado como un «cortafuegos» para sortear las deudas del grupo y habló de «fraude corporativo mani-fiesto». «Le aseguro que no», respondió la vicepresidenta. «Cualquier comportamiento irregular se habría denunciado», añadió. Invocó el informe del Tribunal de Cuentas y defendió que los 13 criterios de elegibilidad fueron examinados. Sobre la presencia de Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de Moncloa, en reuniones del Consejo Gestor, dijo que entendía que «se estimó que era oportuna».

Plus Ultra abrió otro tramo incómodo. Aagesen votó a favor del rescate de 53 millones a la aerolínea, aprobado en marzo de 2021. El PP le recordó el informe confidencial de Aviación Civil que describía a la compañía como pequeña, con pérdidas desde 2015, presencia reducida en Barajas y una cuota mínima en el mercado español. Aagesen aseguró que no conocía ese contenido: «Toda esa información que usted me está relatando la desconozco totalmente». También dijo que no le constaba ninguna irregularidad ni ninguna filtración.

El PP acusa a la SEPI de actuar como «palanca de corrupción» en las ayudas estratégicas que el Estado concedió en la pandemia